

Resumen ejecutivo

¿QUIÉN ASUME EL COSTE? IMPACTOS DE LAS ECONOMÍAS GLOBALES EN COLOMBIA

El caso de Buenaventura: riesgos para la defensa
de los derechos humanos frente a intereses
corporativos españoles



PBI, presente en Colombia desde hace más de 30 años, acompaña en Buenaventura a diversas organizaciones y procesos colectivos de defensa de derechos humanos. Estas colectividades ponen énfasis en la importancia de analizar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos relacionadas con los intereses económicos allí presentes. Atendiendo a estas voces, PBI ha realizado este informe que pretende contribuir a la identificación de dichos intereses —específicamente los de las empresas españolas—, así como a la comprensión del contexto territorial y de los riesgos vinculados a la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. A través de una metodología que combina análisis documental, entrevistas y una visita *in situ*, se busca no sólo documentar los hechos, sino también dar voz a las iniciativas locales orientadas a abordar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos. La confidencialidad de las personas participantes se mantiene para salvaguardar su seguridad.

Buenaventura se localiza en la costa del Pacífico, en el Valle del Cauca, Colombia.

Es el municipio más amplio del departamento | con una superficie de **6.078 km²**

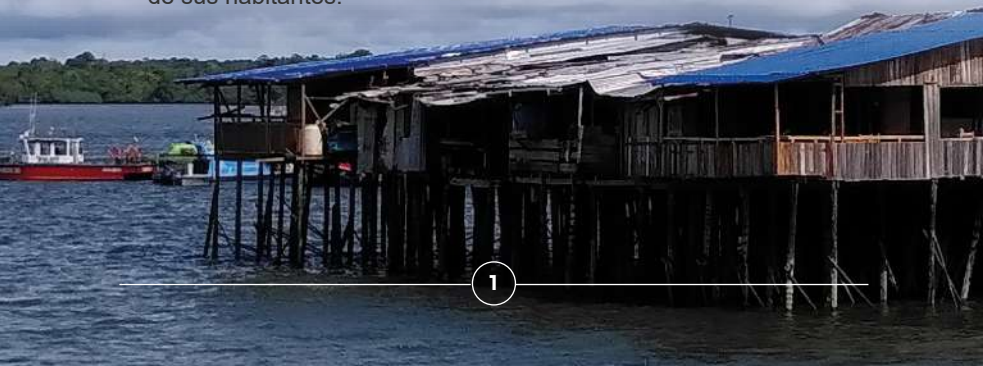


Exhibe una riqueza de ecosistemas que incluye manglares y selvas tropicales, y dispone de abundantes recursos naturales como carbón y oro.

Limita al norte con el departamento del Chocó y se halla a 115 km de la ciudad de Cali.

COSTA PACÍFICA

La población afrodescendiente constituye aproximadamente el 87% de sus 256.921 habitantes según el censo de 2018, aunque las proyecciones para 2024 indicaban un crecimiento a 324.130 habitantes. Existen discrepancias sobre la cifra poblacional, sugiriendo algunas cifras que la población real podría ascender hasta 500.000 habitantes, lo que refleja la constante movilidad de sus habitantes.



Para comprender la realidad de Buenaventura es fundamental realizar un **recorrido histórico**. Fundada en 1540 como un puerto fluvial en el río San Juan, Buenaventura ha sido escenario de conflictos entre colonizadores españoles y pueblos indígenas. Inicialmente se consideró un puerto estratégico para el desarrollo de la ciudad de Cali pero su relevancia aumentó con la llegada de la minería y la agricultura en el siglo XVI, que atrajo a la población afrodescendiente. En 1827 evolucionó hacia un puerto marítimo, lo que provocó un auge económico gracias a la exportación de café y tabaco. A pesar del avance en infraestructura como la construcción de un muelle en 1923 y una carretera hacia Cali en 1944, Buenaventura enfrentó desventajas frente a otros puertos y un racismo persistente hacia sus habitantes. En las décadas de los 40 y 50 se consolidó como el principal puerto del país aunque una gran parte de sus ingresos no se reinvertía, lo que generó descontento local. Su desarrollo estuvo caracterizado por una economía extractivista que pasó por alto las necesidades de la comunidad, creando un modelo de "**puerto sin comunidad**". Así, aunque Buenaventura es un lugar de vida para sus habitantes, ha sido históricamente percibido por las élites como un simple punto comercial.

En un **período más reciente (1990 - 2010)** es fundamental resaltar eventos significativos como la adopción de una nueva constitución en 1991, la privatización del sistema de gestión portuaria en 1993 y el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes.

Este periodo también estuvo caracterizado por un incremento en la actividad de grupos armados, destacándose la llegada de grupos paramilitares que buscaban establecer el control sobre la región, como se evidencia en los testimonios recopilados, debido a la ubicación estratégica de Buenaventura y a los intereses económicos en el puerto. La privatización dio origen a la *Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura*, lo que condujo a una reducción drástica del empleo y a condiciones laborales precarias, rompiendo los vínculos históricos que existían entre





la comunidad local y el puerto. A pesar de la promulgación de la Ley 70 de 1993, que formalizó los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes, estos derechos se vieron amenazados por actos de violencia y despojo que generaron desplazamientos y masacres como la masacre del Naya en 2001 y la de Punta del Este en 2005. Estos ejemplos son una muestra de la violencia sistemática perpetrada contra la población civil, impulsada por intereses económicos y con la complicidad de las élites locales. A pesar de la desmovilización oficial del grupo paramilitar “Bloque Calima” en 2004, la violencia persistió, revelando un clima de control y terror que socava las perspectivas de la sociedad civil en la región.

La situación actual en Buenaventura se define por la **discriminación, la violencia y el racismo estructurales**, a pesar de ciertos progresos en el diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que tienen presencia en la ciudad y en los territorios aledaños. Aunque se ha registrado una disminución en la tasa de homicidios entre 2021 y 2022, en 2023 se ha observado un nuevo incremento, convirtiendo a la ciudad en una de las más violentas del país.

La impunidad generalizada perpetúa la desconfianza hacia las instituciones, y la presencia de actores armados ilegales complica aún más un escenario donde son frecuentes las denuncias de extorsiones y reclutamiento de jóvenes. La población afrodescendiente, y en particular las mujeres, enfrentan serios retos en sus prácticas

ancestrales debido a proyectos industriales que amenazan sus medios de vida. La violencia de género es otro de los elementos críticos, con altos niveles de violencia sexual por parte de integrantes de grupos armados. Asimismo, la situación de la comunidad LGBTIAQ+ es alarmante y su alcance real difícil de contabilizar debido al subregistro de agresiones en su contra.

La economía local, dependiente del puerto, enfrenta **una crisis social manifestada en altos índices de pobreza, desnutrición infantil y un desempleo significativo**, mientras que los beneficios económicos del desarrollo portuario no llegan a la población local, que padece el impacto del racismo estructural. La expansión portuaria ha ocasionado el desplazamiento forzado de comunidades, incrementando su vulnerabilidad y reflejando una profunda crisis que contrasta con la riqueza en recursos de la región.

En este contexto, la región de Buenaventura está captando un **creciente interés económico a nivel global**, incluyendo el de empresas españolas, debido a su ubicación estratégica y a su notable potencial de crecimiento. Este estudio resalta la presencia económica española a través de varias empresas vinculadas a la economía portuaria:



Compañías que proporcionan servicios portuarios mediante terminales de carga y descarga de mercancías, como es el caso del Grupo Ership, activo desde 2004 con su participación en Compas S.A. (que dispone de un terminal en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) y otro en el puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPR-BUN) en la isla Cascajal).



Empresas de logística de mercancías, como TIBA, que estableció su presencia en Buenaventura en 2020 tras adquirir la empresa colombiana Bemel.



Compañías dedicadas a concesiones y desarrollo de infraestructuras como el Grupo Sacyr, que a través de su filial colombiana Unión Vial Camino del Pacífico recibió en 2022 la concesión del corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Bugá.

En el ámbito de la actividad portuaria, aunque ya no se considera como empresa española tras ser adquirida por APM Terminals, el informe menciona las múltiples investigaciones realizadas en torno a la llegada y presencia del proyecto TCBUEN, anteriormente parte del Grup Maritim TCB de Catalunya. Estas indagaciones han resaltado los efectos negativos sobre las comunidades cercanas y ponen de relieve la necesidad de cuestionar qué ocurre con la responsabilidad de estos impactos al cambiar la 'nacionalidad' de una empresa.

En otro ámbito, se analiza el caso de Unión Fenosa (actualmente Naturgy) y la represa de Anchicayá. En 2001, mientras Unión Fenosa gestionaba la represa y tras varios años de deficientes labores de mantenimiento y acumulación de sedimentos, la empresa decidió abrir las compuertas derramando todo el lodo en el río Anchicayá aguas abajo lo que, según detallan varios informes, afectó a la comunidad y continúa causando impactos negativos.

Frente a estos intereses económicos, es imperativo considerar los **riesgos significativos asociados a las violaciones de derechos humanos**, la gobernanza y la democracia en Buena-ventura.

Se destaca la necesidad de que las empresas cumplan con los estándares internacionales ya existentes, tales como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y la nueva directiva de la UE sobre diligencia debida corporativa, que entró en vigor en julio de 2024. Pero, sobre todo, se destaca la necesidad de avanzar de manera prioritaria hacia marcos regulatorios sólidos que garanticen la protección de las personas, organizaciones y comunidades defensoras, posibiliten la prevención de vulneraciones de derechos humanos, establezcan responsabilidades y sanciones concretas, y garanticen la participación, el acceso a la justicia y la reparación a las personas y comunidades afectadas.



Los riesgos son múltiples y es esencial que las empresas, así como los gobiernos de España y de las las comunidades autónomas los contemplen.

Estos riesgos incluyen:

Acciones ilegales y criminales

que se utilizaron para controlar el territorio así como la limitación del uso del territorio para las comunidades.

Afectación al medio ambiente, a espacios y recursos de las poblaciones.

Riesgo de verse involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales.

Aprovecharse (directa o indirectamente) o participar (directa o indirectamente) del fenómeno de la corrupción en Buenaventura.

Riesgo de fortalecer / financiar de una forma u otra a los grupos armados presentes en Buenaventura.

Esta investigación no tiene como objetivo establecer vínculos directos entre las empresas mencionadas y las violaciones a los derechos humanos, sino señalar la existencia de riesgos significativos y concretos que respaldan la necesidad de una aplicación oportuna de las normativas internacionales sobre empresas y derechos humanos.

Frente a la problemática de las violaciones a lo derechos humanos así como de la discriminación social y racial, es fundamental destacar y respaldar la tenaz **resistencia de la comunidad bonaverense**. Los ejemplos son múltiples: el Espacio Humanitario Puente Nayero creado en 2014 con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), ha logrado alcanzar un impresionante récord de cero asesinatos en un período de nueve años en unos de los barrios más violentos de la ciudad; las comunidades organizadas en torno al Proceso de Comunidades

Negras (PCN) persisten en su defensa colectiva del territorio y la promoción de la autogobernanza; el Comité Interorganizacional para la Defensa de los Territorios lucha por la salvaguarda de áreas urbanas frente a la desposesión sistemática provocada por la expansión portuaria.

Todas estas iniciativas colectivas son el reflejo de la resistencia y solidaridad comunitaria ante la violencia. La comunidad bonaverense ha demostrado una admirable capacidad para unirse, organizando protestas significativas en pro de la paz y el desarrollo social, destacándose el Paro Cívico que duró más de 20 días entre mayo y junio de 2017.

Asimismo, el Estero de San Antonio se ha convertido en un emblema en la lucha contra la desaparición forzada, propiciando protecciones legales y el reconocimiento para las mujeres que buscan a sus seres queridos. En junio de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció este sitio como "lugar de memoria" permitiendo el impulso de iniciativas de recuperación de restos de personas desaparecidas y poniendo en evidencia el papel de las mujeres en estos esfuerzos por la recuperación de la memoria y la construcción de paz. En este sentido, a través de un proceso legislativo que ha enfrentado numerosos desafíos, en 2024 se ha logrado la aprobación de la Ley 2364 de 2024 o Ley de las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada. Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización de familiares de personas desaparecidas e impulsora de esta ley, enfatizó que es fruto de un esfuerzo colectivo de las mujeres buscadoras y representa el debido reconocimiento a su difícil situación así como una herramienta para futuras reivindicaciones de derechos. El contexto general pone de relieve la persistente resistencia y activismo de las comunidades afectadas.



En el contexto global, y específicamente en Buenaventura, la existencia de sectores económicos en áreas afectadas por la violencia sistémica, la corrupción y otras problemáticas representa un reto significativo. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, tras llevar a cabo una visita a Colombia, expresó preocupaciones notables en relación con la salvaguarda de los derechos humanos en el ámbito de los proyectos empresariales haciendo hincapié en la marginalización de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravada por la explotación de recursos y el conflicto armado.

Por todo lo anterior, y en aras de aumentar las garantías para la defensa de los derechos humanos, el informe presenta **recomendaciones** al Estado español para que:



Avance hacia una legislación estatal en materia de empresas y derechos humanos que ofrezca garantías sólidas para la protección de personas, organizaciones y comunidades defensoras, garantice su participación efectiva, e incluya mecanismos eficaces de justicia y reparación.



Adopte un rol activo en el impulso de la propuesta del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos.



Apoye la creación de observatorios estatales y autonómicos sobre Derechos Humanos y empresas, como el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos y otras iniciativas similares que puedan ser impulsadas desde la sociedad civil.

El propósito fundamental de estas recomendaciones es promover transformaciones estructurales y sociales, situando los derechos de la ciudadanía en el núcleo de las políticas y de las relaciones comerciales, en lugar de priorizar el interés empresarial. Solo de este modo podremos vislumbrar la creación de un entorno propicio para alcanzar una paz auténtica y sostenible, la paz que todas y todos deseamos.



Te invitamos a leer el informe completo en



Financiadores:



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



Generalitat
de Catalunya



Bilbao
UDALA
AYUNTAMIENTO



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN



Ajuntament
de Barcelona



GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

El contenido de este resumen ejecutivo y del informe no reflejan necesariamente el posicionamiento de los financiadores.

Resum executiu

QUI N'ASSUMEIX EL COST? IMPACTES DE LES ECONOMIES GLOBALES A COLÒMBIA

El cas de Buenaventura: riscos per a la defensa
dels drets humans davant d'interessos
corporatius espanyols



PBI, present a Colòmbia des de fa més de trenta anys, acompanya a Buenaventura diverses organitzacions i processos col·lectius de defensa dels drets humans. Aquestes col·lectivitats posen èmfasi en la importància d'analitzar les violacions sistemàtiques dels drets humans relacionades amb els interessos econòmics allí presents. A partir d'aquestes veus, PBI ha elaborat aquest informe que pretén contribuir a la identificació d'aquests interessos —específicament els de les empreses espanyoles—, així com a la comprensió del context territorial i dels riscos vinculats a la defensa dels drets humans i la justícia social i ambiental. A través d'una metodologia que combina anàlisi documental, entrevistes i una visita in situ, es busca no solament documentar els fets, sinó també donar veu a les iniciatives locals orientades a abordar les causes estructurals de les violacions dels drets humans. La confidencialitat de les persones participants es manté per preservar-ne la seguretat.

Buenaventura es localitza a la costa del Pacífic, a la vall del Cauca, Colòmbia.

i és el municipi més extens del departament | amb una superfície de **6.078 km²**

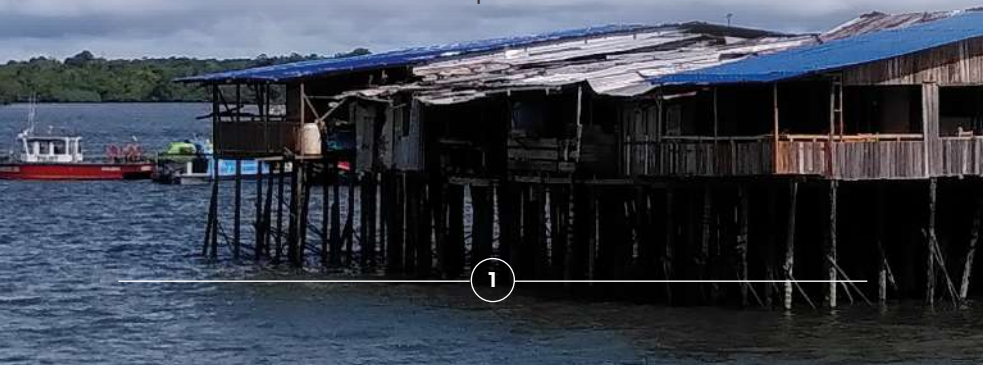


Aquest municipi posseeix una riquesa d'ecosistemes que inclou manglars i selves tropicals, i disposa d'abundants recursos naturals com carbó i or.

COSTA PACÍFICA

Limita al nord amb el departament del Chocó i es troba a 115 km de la ciutat de Cali.

La població afrodescendent constitueix aproximadament el 87 % dels seus 256.921 habitants segons el cens de 2018, encara que les projeccions per a 2024 indicaven un creixement fins als 324.130 habitants. Existeixen discrepàncies sobre la xifra poblacional, i algunes xifres suggereixen que la població real podria ascendir fins a 500.000 habitants, la qual cosa reflecteix la constant mobilitat dels seus pobladors.



Per entendre la realitat de Buenaventura, és fonamental fer-hi un **recorregut històric**. Fundada el 1540 com un port fluvial al riu San Juan, Buenaventura ha estat escenari de conflictes entre colonitzadors espanyols i pobles indígenes. Inicialment, es va considerar un port estratègic per al desenvolupament de la ciutat de Cali, però la seva rellevància va augmentar amb l'arribada de la mineria i l'agricultura al segle XVI, que va atreure la població afrodescendent. El 1827 va evolucionar cap a un port marítim, la qual cosa va provocar un auge econòmic gràcies a l'exportació de cafè i tabac. Malgrat l'avanç en la creació d'infraestructures, com la construcció d'un moll el 1923 i una carretera cap a Cali el 1944, Buenaventura va haver d'afrontar desavantatges davant d'altres ports i un racisme persistent cap als seus habitants. En les dècades dels quaranta i cinquanta es va consolidar com el principal port del país, encara que una gran part dels seus ingressos no es reinvertia, la qual cosa va generar un fort descontentament local. El seu desenvolupament va estar caracteritzat per una economia extractivista que va passar per alt les necessitats de la comunitat, de manera que es va crear un model de **"port sense comunitat"**. Així, encara que Buenaventura és un lloc de vida per als seus habitants, ha estat històricament percebut per les elits com un simple punt comercial.

En un **període més recent (1990-2010)**, és fonamental ressaltar-ne esdeveniments significatius com l'adopció d'una nova constitució el 1991, la privatització del sistema de gestió portuària el 1993 i el reconeixement dels drets territorials de les comunitats afrodescendents.

Aquest període també va estar caracteritzat per un increment en l'activitat de grups armats, en què destaca l'arribada de grups paramilitars que buscaven establir el control sobre la regió, tal com s'evidencia en els testimoniatges recopilats, a causa de la ubicació estratègica de Buenaventura i dels interessos econòmics en el port. La privatització va donar origen a la *Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura*, fet que va conduir a una reducció dràstica de l'ocupació i a condicions laborals precàries, de manera que es van trencar els vincles històrics que existien entre la comunitat local i el port.



Malgrat la promulgació de la Llei 70 de 1993, que va formalitzar els drets col·lectius de les comunitats afrodescendents, aquests drets es van veure amenaçats per actes de violència que van generar desplaçaments i massacres com la massacre del Naya el 2001 i la de Punta del Este el 2005. Aquests exemples són una mostra de la violència sistemàtica perpetrada contra la població civil, impulsada per interessos econòmics i amb la complicitat de les elits locals. Malgrat la desmobilització oficial del grup paramilitar Bloque Calima el 2004, la violència va persistir, fet que provoca actualment un clima de control i terror que socava les perspectives de la societat civil a la regió.

La situació actual a Buenaventura es caracteritza per la **discriminació, la violència i el racisme estructurals**, malgrat alguns progressos en el diàleg entre el Govern i els grups armats il·legals que tenen presència a la ciutat i als territoris limítrofs. Encara que es va constatar una disminució en la taxa d'homicidis entre el 2021 i el 2022, durant el 2023 se n'ha observat un nou increment, de manera que la ciutat s'ha convertit en una de les més violentes del país.

La impunitat generalitzada perpetua la desconfiança cap a les institucions, i la presència d'actors armats il·legals complica encara més un escenari on són freqüents les denúncies d'extorsions i reclutament de joves. La població afrodescendent, i en particular les dones, afronten seriosos reptes en les seves pràctiques ancestrals a causa de projectes industrials que amenacen els seus mitjans de vida. La violència de gènere és un altre dels elements

crítics, amb alts nivells de violència sexual per part d'integrants de grups armats. Així mateix, la situació de la comunitat LGBTIAQ+ és alarmant i el seu abast real, difícil de comptabilitzar a causa de l'infraregistrament d'agressions en contra seva.

L'economia local, dependent del port, afronta **una crisi social que es manifesta per mitjà d'alts índexs de pobresa, desnutrició infantil i una desocupació significativa**, mentre que els beneficis econòmics del desenvolupament portuari no arriben a la població local, que pateix l'impacte del racisme estructural. L'expansió portuària ha ocasionat el desplaçament forçat de comunitats, fet que n'ha incrementat la vulnerabilitat i reflecteix una profunda crisi que contrasta amb la riquesa en recursos de la regió.

En aquest context, la regió de Buenaventura està captant un **creixent interès econòmic en l'àmbit global**, incloent-hi el d'empreses espanyoles, a causa de la seva ubicació estratègica i el seu notable potencial de creixement. Aquest estudi ressalta la presència econòmica espanyola a través de diverses empreses vinculades a l'economia portuària:



Companyies que proporcionen serveis portuaris mitjançant terminals de càrrega i descàrrega de mercaderies, com és el cas del Grupo Ership, actiu des de 2004 amb participació a Compas S.A. (que disposa d'un terminal a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) i un altre al port de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) a l'illa de Cascajal).



Empreses de logística de mercaderies, com TIBA, que va establir la seva presència a Buenaventura el 2020 després d'adquirir l'empresa colombiana Bemel.



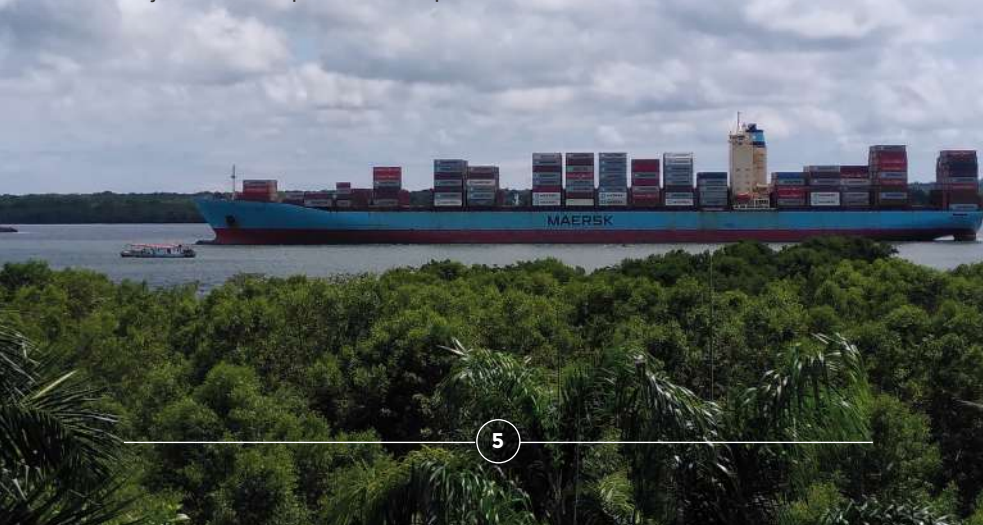
Companyies dedicades a concessions i al desenvolupament d'infraestructures com el Grupo Sacyr, que a través de la seva filial colombiana Unión Vial Camino del Pacífico va rebre el 2022 la concessió del corredor viari Buenaventura–Loboguerrero–Buga.

En l'àmbit de l'activitat portuària, encara que ja no es considera com a empresa espanyola després de ser adquirida per APM Terminals, l'informe esmenta les múltiples recerques dutes a terme a l'entorn de l'arribada i presència del projecte TCBUEN, anteriorment part del Grup Marítim TCB de Catalunya. Aquestes indagacions han ressaltat els efectes negatius sobre les comunitats pròximes i posen en relleu la necessitat de qüestionar què passa amb la responsabilitat d'aquests impactes quan es canvia la “nacionalitat” d'una empresa.

En un altre àmbit, s'analitza el cas d'Unión Fenosa (actualment Naturgy) i la presa d'Anchicayá. El 2001, mentre Unión Fenosa gestionava la resclosa i després de diversos anys de tasques de manteniment deficientes i acumulació de sediments, l'empresa va decidir obrir les comportes i vessar tot el llot al riu Anchicayá, cosa que, segons detallen diversos informes, va afectar la comunitat i continua causant impactes negatius.

Davant d'aquests interessos econòmics, és imperatiu considerar els riscos significatius associats a les violacions de drets humans, la governança i la democràcia a Buenaventura.

Es destaca la necessitat que les empreses compleixin amb els estàndards internacionals ja existents, com ara els Principis rectors de l'ONU sobre empreses i drets humans i la nova directiva de la UE sobre diligència deguda corporativa, que va entrar en vigor al juliol de 2024. Però, sobretot, es destaca la necessitat d'avançar de manera prioritària cap a marcs reguladors sòlids que garanteixin la protecció de les persones, organitzacions i comunitats defensores; que possibilitin la prevenció de vulneracions de drets humans; que estableixin responsabilitats i sancions concretes, i que garanteixin la participació, l'accés a la justícia i la reparació a les persones i comunitats afectades.



Els riscos són múltiples i és essencial que les empreses, així com els governs d'Espanya i de les comunitats autònomes, els contemplin.

Aquests riscos inclouen:

Accions il·legals i criminals

que es van utilitzar per controlar el territori, així com la limitació de l'ús del territori per a les comunitats.

Afectació del medi ambient, espais i recursos de les poblacions.

Risc de veure's involucrats en activitats relacionades amb el tràfic de substàncies il·legals.

Profit (directe o indirecte) o participació (directa o indirecta) en el fenomen de la corrupció a Buenaventura.

Risc d'enfortir o finançar d'alguna manera els grups armats presents a Buenaventura.

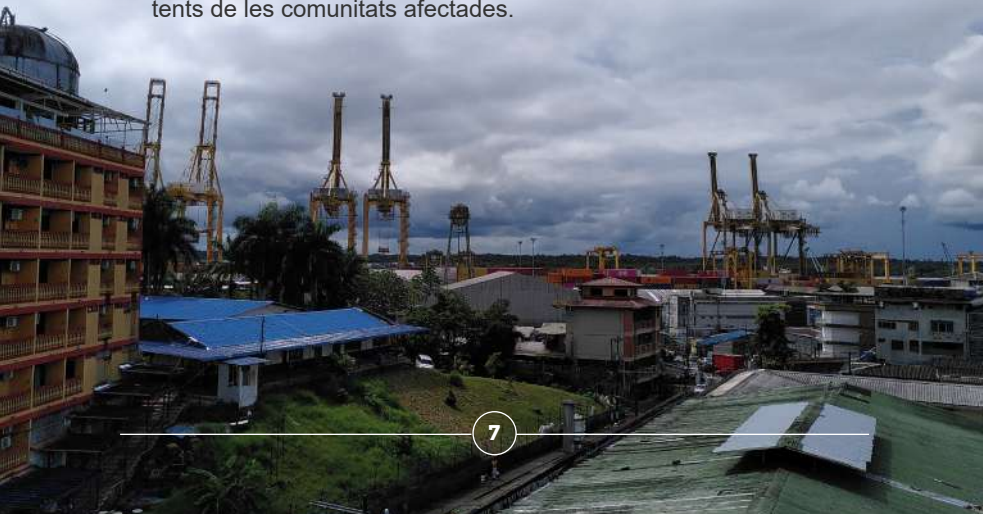
Aquesta recerca no té com a objectiu establir vincles directes entre les empreses esmentades i les violacions dels drets humans, sinó assenyalar l'existència de riscos significatius i concrets que donen suport a la necessitat d'una aplicació oportuna de les normatives internacionals sobre empreses i drets humans.

Davant de la problemàtica de les violacions dels drets humans, així com de la discriminació social i racial, és fonamental destacar i donar suport a la tenaç **resistència de la comunitat de Buenaventura**. Els exemples són múltiples: l'Espacio Humanitario Puente Nayero, creat el 2014 amb l'acompanyament de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), ha aconseguit un impressionant rècord de zero assassinats en un període de nou anys en alguns dels barris més violents de la ciutat; les comunitats organitzades entorn del Proceso de Comunidades

Negras (PCN) persisteixen en la defensa col·lectiva del territori i la promoció de l'autogovernança; el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios lluita per la salvaguarda d'àrees urbanes davant de la desposseïció sistemàtica provocada per l'expansió portuària.

Totes aquestes iniciatives col·lectives són el reflex de la resistència i solidaritat comunitàries davant la violència. La comunitat de Buenaventura ha demostrat una admirable capacitat per unir-se, de tal manera que ha organitzat protestes significatives en pro de la pau i el desenvolupament social, entre les quals destaca l'aturada cívica que va durar més de vint dies entre maig i juny de 2017.

Així mateix, l'Estero de San Antonio s'ha convertit en un emblema en la lluita contra la desaparició forçada, i ha propiciat proteccions legals i el reconeixement per a les dones que busquen els seus éssers estimats. Al juny de 2024 la Jurisdicció Especial para la Paz (JEP) va reconèixer aquest lloc com a "lloc de memòria", fet que va permetre l'impuls d'iniciatives de recuperació de restes de persones desaparegudes i va posar en evidència el paper de les dones en aquests esforços per a la recuperació de la memòria i la construcció de la pau. En aquest sentit, a través d'un procés legislatiu que ha afrontat nombrosos desafiaments, el 2024 s'ha aconseguit l'aprovació de la Llei 2364 de 2024 o Llei de les dones buscadores de víctimes de desaparició forçada. Yanette Bautista, de la Fundació Nydia Erika Bautista, organització de familiars de persones desaparegudes i impulsora d'aquesta llei, va emfatitzar que és fruit d'un esforç col·lectiu de les dones buscadores i representa el reconeixement que cal a la seva difícil situació, ahora que es converteix en una eina per a futures reivindicacions de drets. El context general posa en relleu la resistència i l'activisme persistents de les comunitats afectades.



En el context global, i específicament a Buenaventura, l'existència de sectors econòmics en àrees afectades per la violència sistèmica, la corrupció i altres problemàtiques representen un repte significatiu. El Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans, després de dur a terme una visita a Colòmbia, va expressar preocupacions notables amb relació a la salvaguarda dels drets humans en l'àmbit dels projectes empresarials i va posar l'accent en la marginalització de comunitats indígenes, afrodescendents i pageses, agreujada per l'explotació de recursos i el conflicte armat.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, i a fi d'augmentar les garanties per a la defensa dels drets humans, l'informe presenta **recomanacions** a l'Estat espanyol per què:



Avanci cap a una legislació estatal en matèria d'empreses i drets humans que ofereixi garanties sòlides per a la protecció de persones, organitzacions i comunitats defensores; en garanteixi la participació efectiva, i inclogui mecanismes eficaços de justícia i reparació.



Adopti un rol actiu en l'impuls de la proposta del Tractat Vinculant de les Nacions Unides per a Empreses Transnacionals en matèria de drets humans.



Doni suport a la creació d'observatoris estatals i autonòmics sobre drets humans i empreses, com el Centre Català d'Empresa i Drets Humans i altres iniciatives similars que puguin ser impulsades des de la societat civil.

El propòsit fonamental d'aquestes recomanacions és promoure transformacions estructurals i socials, i situar els drets de la ciutadania en el nucli de les polítiques i de les relacions comercials, en lloc de prioritzar l'interès empresarial. Només d'aquesta manera podrem albirar la creació d'un entorn propici per aconseguir una pau autèntica i sostenible, la pau que totes i tots desitgem.



Et convidem a llegir
l'informe complet en



Finançadors:



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



Generalitat
de Catalunya



Bilbao
SODIA
AYUNTAMIENTO



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN



Ajuntament
de Barcelona



GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

El contingut d'aquest resum executiu i de l'informe no reflecteix
necessàriament el posicionament dels finançadors.

Laburpen Exekutiboa

NORK ORDAINTZEN DU KOSTUA? EKONOMIA GLOBALEN ONDORIOAK KOLONBIAN

Buenaventurako kasua: Espainiako interes korporatiboen aurrean giza eskubideak defendatzearen arriskuak



PBI 30 urte baino gehiago daramatza Kolonbian, eta Buenaventuran giza eskubideak defendatzeko hainbat erakunde eta prozesu kolektibo laguntzen ditu. Kolektiboek, bada, giza eskubideen urraketa sistematikoak aztertzearen garrantzia nabarmentzen dute, eskualdean dauden interes ekonomikoekin lotuta. Beraz, ahots horiek kontuan hartuta, PBIk honako txosten hau egin du, interes horiek –zehazki, Espainiako enpresei dagozkienak– identifikatzen laguntzeko, eta giza eskubideak eta gizarte eta ingurumen justizia defendatzeak dakartzan arriskuak ezagutzeko. Azterketa dokumentala, elkarrizketak eta in situ bisita bat uztartzen dituen metodologia erabilia, gertakariak dokumentatu nahi ditugu eta tokiko ekimenei ahotsa eman nahi diegu, hain zuzen ere, giza eskubideen urraketen egiturazko kausak aztertzen dituzten ekimen horiei. Hala ere, parte-hartzaileen konfidentzialtasuna gordeko dugu, haien segurtasuna bermatzeko.

Buenaventura Ozeano Barearen kostaldean dago, Kolonbiako Cauca haranean.

eta departamendu osoko udalerririk zabalena da

azalerarekin

6.078 km²-ko



Udalerririk ekosistema aberatsak ditu, hala nola mangladiak eta ohian tropikalak; baita ikatza, urrea eta beste hainbat baliabide natural ere.

COSTA PACÍFICA

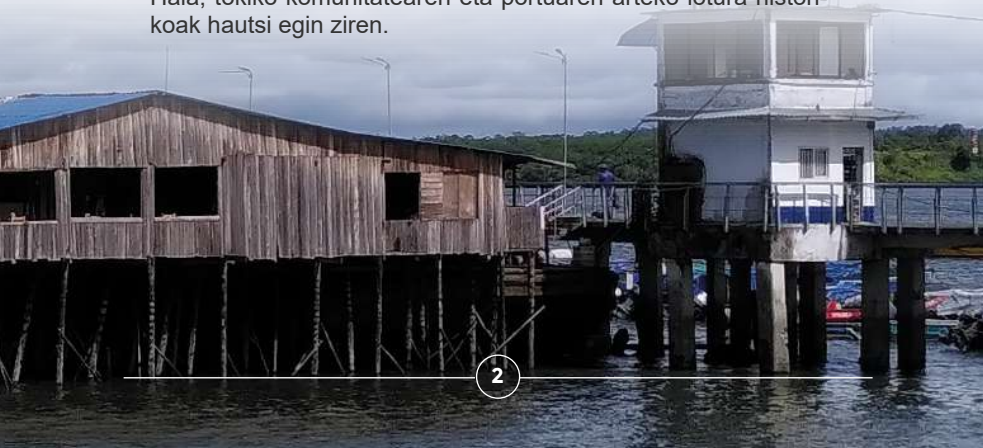
Iparraldean Chocó departamendua du eta eta Cali hiritik 115 kilometrora dago.

Afrikar jatorriko herritarrak biztanleria osoaren % 87 dira. 2018ko errolda 256.921 biztanlekoa zen, baina 2024rako 324.130 biztanlera heltzea aurreikusten zen. Hala ere, desadostasunak daude kopuru horren inguruan, izan ere, batzuen ustez benetako biztanle-kopurua 500.000 inguru da. Horrek, bada, biztanleen etengabeko mugikortasuna adierazten du.

Udalerriaren errealitatea ulertzeko bere **historia aztertu** behar dugu. Buenaventura 1540an sortu zen, San Juan ibaiko portu gisa. Espainiar kolonizatzaileen eta herri indigenen arteko gatazken agertoki izan da. Hasiera batean, Cali hiriren garapenerako portu estrategikotzat hartu zen, baina bere garrantziak gora egin zuen XVI. mendean meatzaritzarekin eta nekazaritzarekin hasi zirenean. Jarduera horiek afrikar jatorriko biztanleak erakarri zituen. 1827an itsas-portu bilakatu zen, eta horrek gorakada ekonomikoa ekarri zuen, kafearen eta tabakoaren esportazioari esker. Hala, aurrera egin zen azpiegiturei dagokienez. 1923an, kai bat eraiki zuten, eta 1944an Calira joateko errepide bat. Hala ere, Buenaventura herriak desabantailak izan zituen beste portu batzuekin alderatuta, eta bere biztanleek arrazakeria pairatu izan dute etengabe. 1940ko eta 1950eko hamarkadetan herrialdeko portu nagusi gisa finkatu zen, baina haren diru-sarreraren zati handi bat ez zen berrinbertitzen, eta horrek tokikoen haserrea eragin zuen. Herriaren garapena ekonomia estraktibista batean oinarritu zen, komunitatearen beharrak alde batera utzita. Hala, **“komunitate-rik gabeko portu”** eredu bat sortu zen. Buenaventura bizileku bat da bere biztanleentzat, baina eliteek merkataritza-gune huts gisa ikusi izan dute historikoki.

Azken aldian (1990 - 2010) zenbait gertakizun garrantzitsu izan dira. Esate baterako, 1991n konstituzio berria onartu zuten, 1993an portuaren kudeaketa-sistema pribatizatu zuten, eta afrikar jatorriko komunitateen lurralde-eskubideak onartu dira.

Aldi horretan, halaber, talde armatuen jarduera handitu zen, eta eskualdea kontrolatu nahi duten talde paramilitarrak heldu ziren. Hori, bada, jasotako lekukotzetan ikusten da. Hain zuzen, herriak kokapen estrategikoa du eta portuak interes ekonomikoak pizten ditu. Pribatizazioaren ondorioz, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura sortu zen, eta horrek enpleguaren murrizketa handia eta lan-baldintza prekarioak ekarri zituen. Hala, tokiko komunitatearen eta portuaren arteko lotura historikoak hautsi egin ziren.





Gero, 1993an ere, 70 Legea aldarrikatu zen. Hark afrikar jatorriko komunitateen eskubide kolektiboak formalizatu zituen. Hala ere, 2001eko Nayako sarraskia eta 2005eko Punta del Esteko sarraskia bezalako indarkeria eta desjabetze egitateen ondorioz, eskubide horiek arriskuan jarri ziren. Izan ere, adibide horiek biztanleria zibilaren aurka erabilitako indarkeria sistematikoa erakusten dute, eta indarkeria horren atzean interes ekonomikoak eta tokiko eliteen konplizitatea daude. 2004an “Bloque Calima” talde paramilitarra ofizialki desmobilizatu bazen ere, indarkeriak jarraitu zuen. **Kontrol eta terrore giro horrek, bada,** eskualdeko biztanleria zibilaren itxaropenak lausotzen ditu.

Buenaventurako **gaur egungo egoerak diskriminazio, indarkeria eta arrazakeria estrukturalak** ditu adierazgarri, nahiz eta Gobernuaren eta hirian eta inguruan dauden talde armatu ilegalen arteko elkarriketan aurrerapausoak izan diren. 2021ean eta 2022an hilketa-tasak behera egin badu ere, 2023an berriz igo da, eta, hain zuzen ere, hiri herrialde osoko hiri biolentoenetako bat da.

Gainera, zigorgabetasun orokorrak instituzioekiko mesfidantza eragiten du; eta eragile armatu ilegalek are gehiago konplikatzen dute egoera. Izan ere, ohikoak dira estortsioak eta gazteen errekrutamendua. Afrikar jatorriko biztanleek, eta batez ere emakumeek, erronka potoloak dituzte beren antzinako praktikak mantentzeko, batez ere, beren bizitzak arriskuan jartzen dituzten proiektu industrialen ondorioz. Genero indarkeria ere beste elementu kritiko bat da, sexu-indarkeria maila handia baitago, talde

armatuetako kideen eskutik. Halaber, LGBTIAQ+ komunitatearen egoera larria da; baina larritasun horren benetako irismena kontabilizatzeko zaila da, ez baitira ondo erregistratzen komunitate haren aurkako erasoak.

Tokiko ekonomia portuari lotuta dago, eta **gizarte krisi** batean murgilduta dago, **pobrezia, haurren desnutrizio eta langabezia maila handiak** ikusita. Portuaren garapenak eragindako onura ekonomikoak ez dira biztanleengana heltzen. Aitzitik, herritarrek arrazakeria estrukturala pairatzen dute. Gainera, portuaren hedapenak lekuz aldatzera behartu ditu hainbat komunitate, eta, hala, horien zaugarritasuna handitu du. Krisi sakon horrek eskualdearen baliabide aberastasunarekin kontrastatzen du.

Testuinguru horretan, Buenaventura eskualdeak **interes ekonomiko gero eta handiagoa** pizten ari da **mundu mailan**, baita Espainiako enpresen artean, beren kokapen estrategikoa eta hazkunde potentziala dela-eta. Hortaz, ikerketa honen bitartez, Espainiak bertan duen presentzia ekonomikoa nabarmendu egiten dugu: Presentzia hori portuko ekonomiari lotutako enpresen bitartez adierazten da:



Portu-zerbitzuak sustatzen dituzten konpainiak, zamalanetarako terminalen bitartez. Hori da, esate baterako, Ership Grupo enpresaren kasua. Hark 2004tik parte hartzen du Compas S.A. enpresan (azken honek terminal bat du Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) portuan eta beste bat Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) sozietateak Cascajal irlan duen portuan).



Salgaien logistikako enpresak, hala nola TIBA. Hura 2020an sartu zen Buenaventuran, Kolonbiako Bemel enpresa erosi ondoren.



Azpiegiturak garatzeko emakidetan zentratutako konpainiak, hala nola Grupo Sacyr enpresa. Horrek, Kolonbian duen Unión Vial Camino del Pacifico filialaren bitartez, Buenaventura-Loboguerrero-Buga korridorea egiteko emakida jaso zuen 2022an.

Portu-jardueraren arloan, txostenak TCBUEN proiektuaren helduerari eta presentziari buruzko hainbat ikerketa aipatzen ditu. TCBUEN Kataluniako Grup Maritim TCB enpresaren parte zen, APM Terminals enpresak hura erosi zuen arte. Beraz, jada ez da enpresa espainiartzar hartzen. Ikerketa horietan, inguruko komunitateetan eragindako ondorio negatiboak nabarmentzen dira, eta enpresaren 'nazionalitatea' aldatzearen ondorioz erantzukizuna norena den aztertu beharra dagoela azpimarratzen du.

Beste esparru batean, Unión Fenosa (gaur egun Naturgy) enpresaren eta Anchicayáko presaren kasua aztertzen da. 2001ean, Union Fenosak presa kudeatzen zuenean, eta urteetan mantentze-lan eskasak egin ondoren, enpresak uhateak irekitzea erabaki zuen eta metatutako sedimentuak eta lohia Anchicayá ibaira isuri zituen. Horrek, hainbat txostenen arabera, komunitateari kalteak eragin zizkion eta eragiten dizkio oraindik ere.

Interes ekonomiko horien aurrean, ezinbestekoa da Buenaventurako **giza eskubideen urraketekin**, gobernantzarekin eta demokraziarekin **lotutako arrisku garrantzitsuak** kontuan hartzea.

Enpresek nazioarteko estandarrak bete behar dituzte, hala nola Enpresei eta Giza Eskubideei buruzko NBERen Printzipio Gidariak eta enpresek iraunkortasunaren arloan duten ardurari buruzko EBren Direktiba berria, 2024ko uztailan indarrean sartu zena. Baina, batez ere, arau-esparru sendoak garatzeko premia nabarmentzen da, honako helburu hauekin: pertsona, erakunde eta komunitate defendatzaileen babesa bermatzea, giza eskubideen urraketak prebenitzea, erantzukizunak eta zigor zehatzak ezartzea, eta kaltetutako pertsonen eta komunitateen parte-hartzea, justiziarako sarbidea eta erreparazioa bermatzea.



Arriskuak askotarikoak dira, eta ezinbestekoa da enpresek eta Espainiako eta autonomia erkidegoetako gobernuek horiek aintzat hartzea.

Hona hemen arrisku horietako batzuk:

ekintza ilegalak
eta kriminalak

Lurraldea kontrolatzera eta komunitateen erabilera mugatzera bideratutako.

Ingurumenari, eta herrien eremuei eta baliabideei kalte egitea, modu batera edo bestera.

Legez kontrako substantziekin lotutako jardueretan nahasita ikusteko arriskua.

Buenaventurako ustelkeriaren fenomenotik onura ateratzea (zuzenean edo zeharka) edo horretan parte hartzea (zuzenean edo zeharka).

Buenaventuran dauden talde militarrek modu batera edo bestera indartzeko/finantzatzeko arriskua.

Ikerketa honen helburua ez da aipatutako enpresen eta giza eskubideen urraketen artean lotura zuzenak ezartzea. Aitzitik, enpresei eta giza eskubideei buruzko nazioarteko arauak behar bezala aplikatzeko premia erakusten duten arrisku garrantzitsuak eta zehatzak nabarmendu nahi ditugu.

Giza eskubideen urraketen eta gizarte eta arraza diskriminazioaren problematikaren aurrean, funtsezkoa da **Buenaventurako komunitatearen erresistentzia** irmoa azpimarratzea eta babestea. Adibide ugari daude: Puente Nayero Ereku Humanitarioa 2014an sortu zen, CIJP Elizarteko Justizia eta Bake Batzordearen laguntzaz, eta ekimenak bederatzi urtetan hilketa-rik ez egotea lortu du hiriko auzorik biolentoenetako batean; PCN komunitate beltzen prozesuaren inguruan antolatutako komunitateek lurraldea kolektiboki defendatzen eta autogober-

nantza sustatzen jarraitzen dute; eta Lurraldeen Defentsarako Erakunde arteko Batzordeak hiri-eremuak babesteko borrokatzen da, portuaren hedapenak eragindako desjabetze sistematikoaren aurrean.

Ekimen kolektibo horiek guztiak indarkeriaren aurrean komunitatearen erresistentzia eta elkartasuna erakusten dute. Izan ere, Buenaventurako komunitateak batzeko ahalmen handia erakutsi du, eta bakearen eta gizarte garapenaren aldeko protesta esanguratsuak antolatu ditu. Horren adibide nabarmena da 2017ko maiatzetik ekainera bitartean hogeigeguneguz egindako geldialdi zibikoa.

Halaber, El Estero de San Antonio desagertze behartuaren aurkako borrokaren ikur bilakatu da. Izan ere, senideen bila dauden emakumeen babes legala sustatu du eta aintzat hartu ditu. 2024ko ekainean, JEP bakerako jurisdikzio bereziak "memoria-gune" izendatu zuen leku hura, eta horrek bultzada bat eman zien desagertutako pertsonen gorpuzkiak berreskuratzeko ekimenei, memoria berreskuratzeko eta bakea eraikitzeko ahalegin horien barruan. Zentzu horretan, hainbat erronka izan dituen prozesu legegilearen bitartez, 2024an, 2364 Legea edo Desagertze Behartuaren Biktimak Bilatzen dituzten Emakumeen Legea onartzea lortu da. Nydia Erika Bautista Fundazioa desagertutako pertsonen senideek osatutako erakunde bat da, eta legearen sustatzailea. Fundazio horretako Ynette Bautistak nabarmendu egin du onarpena emakume bilatzaileen ahalegin kolektibo baten emaitza izan dela. Hala, Legeak haien egoera zailaren aintzatespena dakar, eta etorkizunean eskubideak aldarrikatzeko tresna bat da. Testuinguru orokorrak, bada, kaltetutako komunitateen erresistentzia eta aktibismo iraunkorra nabarmentzen du.



Mundu mailan, eta espezifikoki Buenaventuran, indarkeria sistemikoa, ustelkeria eta beste problematika batzuk dituzten testuinguruetan sektore ekonomikoak egoteak erronka garrantzitsua sortzen du. Hala, esate baterako, Enpresei eta Giza Eskubideei buruzko Nazio Batuen Lantaldeak, Kolonbia bisitatu ondoren, kezka nabarmenak adierazi zituen enpresa-proiektuen esparruan giza eskubideak bermatzeari dagokionez. Izan ere, komunitate indigenen, afrikar jatorrikoen eta nekazarien marjinalizazioa azpimarratu zuen; baliabideen ustiaketak eta gatazka armatuak hura larriagotu baitute.

Aurreko guztia ikusita, eta giza eskubideak defendatzeko bermeak handitze aldera, txostenak **gomendioak** eskaintzen dizkio Espainiako Estatuari, honako helburu hauekin:



Enpresen eta giza eskubideen arloko estatu-mailako legerian aurrera egitea. Legeria horrek, besteak beste, pertsona, erakunde eta komunitate defendatzaileen babeserako berme sendoak eskaini, haien benetako parte-hartzea bermatu eta justizia eta erreparazio mekanismo eraginkorrek ezarri beharko ditu.



Nazio Batuen Enpresa Transnazionalentzako Giza Eskubideen arloko Itun Lotesle baten proposamena bultzatzeko rol aktiboa izatea.



Giza Eskubideen eta enpresen estatu eta autonomia mailako behatokiak sortzen laguntzea, Enpresaren eta Giza Eskubideen Kataluniako Zentroaren eta gizarte zibiletik sustatutako beste ekimen batzuen antzekoak.

Gomendio hauen helburu nagusia eraldaketa estrukturalak eta gizarte eraldaketak sustatzea da. Hala, herritarren eskubideak politiken eta merkataritza-harremanen erdigunean kokatu nahi ditu, enpresen interesa lehenetsi ordez. Horrela bakarrik sortu ahal izango dugu giro egokia benetako bake iraunkor bat lortzeko, guztiok nahi dugun bakea, alegia.



**Ikus ezazu txosten
osoa hemen**



Finantzatzaileak:



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**



**Generalitat
de Catalunya**



Bilbao
UDALA
AYUNTAMIENTO



**DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN**



**Ajuntament
de Barcelona**



**GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO**

Laburpen exekutibo honen edukiak ez du zertan finantzatzaileen iritzia adierazi.



